



Rama Judicial del Poder Público

JUZGADO CINCUENTA Y UNO (51) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D. C.

18 ENE. 2022

Bogotá D. C., _____

Expediente: Ejecutivo Singular
Radicación: 11001 40 03 051 2019 00636 00
Accionante: **NON PLUS ULTRA SA**
Accionadas: **Olga Lucia Salazar Rivera**
Ángela Consuelo Salazar Rivera
Héctor Sady Castro Romero

Surtido el trámite legal, se profiere sentencia anticipada en el presente asunto, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 278 de la Ley 1564 de 2012.

ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción cambiaria directa, y por medio de procurador judicial, la entidad demandante imploró adelantar ejecución singular en contra de los ciudadanos Olga Lucia Salazar Rivera, Ángela Consuelo Salazar Rivera y Héctor Sady Castro Romero, por las obligaciones dinerarias insolutas, incorporadas como derecho de crédito al pagaré N° 696, suscrito el 11 de septiembre de 2013, equivalentes a \$43.051.749, conjuntado a los intereses moratorios causados desde el día siguiente al vencimiento de las cuotas en mora desde la N° 36 a la 48.

ACTUACIÓN DE LA INSTANCIA

1. El mandamiento de pago exorado se libró en auto del 11 de julio de 2019 (fl. 14, cdno. 1), cual se puso en conocimiento de la demandada Olga Lucia Salazar Rivera de forma personal el 30 de septiembre de 2019 (fl. 15, ib), al demandado Héctor Sady Castro Romero por conducta concluyente (fl. 43, ib) y

la demandada Ángela Consuelo Salazar Rivera a través de curadora *ad litem* el 22 de septiembre de 2020 (fl. 58, ib); todos, a quienes se trasladó la demanda y sus anexos.

2. Tempestivamente, cada uno de los demandados, por conducto de sus representantes judiciales, propusieron medios exceptivos que se pasan a reseñar:

2.1. Olga Lucia Salazar Rivera, señaló como negocio causal para otorgar el pagaré que sirve como báculo a la ejecución la adquisición de un vehículo de transporte colectivo de pasajeros en favor de Mauricio Sarmiento Calvo, con quien sostuvo una relación sentimental que culminó con el abandono del hogar; no obstante, al enterarse de mora en el pago de las cuotas del crédito, se contactó con el abogado Alexander Contreras, y, de consuno, se acordó la dación en pago, incluso, mediante documento privado del 3 de septiembre de 2019.

Acorde a lo anterior, propuso como excepciones las que denominó "inexigibilidad de la obligación de pagaré No. 696" y "falta de condiciones perentorias exigibilidad para la exigibilidad del pagaré"; la primera, en medida que llegó a un acuerdo de dación en pago con la demandante y, la segunda, porque no se presentó el título valor para su pago, en los términos del artículo 691 del Código de Comercio. Por último, alegó el "pago parcial", según las pruebas que se surtirán en el proceso.

2.2. Héctor Sady Castro Romero, indicó que la demandante intentó una notificación amañada en la Carrera 5 N° 96 - 94 de la ciudad de Ibagué, pero del proceso 2019 - 0636 y respecto de un auto proferido el 11 de julio de 2019, dónde la demandada es la sociedad Mantenimiento, Publicidad Exterior e Ingeniería LTDA, faltando a sus garantías procesales.

Tras anotar lo que consideró un desafuero, propuso como "excepción perentoria" el hecho de no haber sido requerido para el pago en fecha anterior a su notificación del mandamiento ejecutivo librado en éste proceso. A su turno, esgrimió que el contrato de prenda con desapoderamiento N° 5114, del cual emana la obligación cambiaria - negocio causal - no lo suscribió. Por la misma senda, alegó que entre la demandante y sus codemandadas se llevó a cabo una refinanciación de la cual no fue enterado.

También anotó, bajo la misma egida, que el pagaré del cual se sirve la presente acción no se presentó para el pago, en los términos del artículo 691 del Código de Comercio.

Por último, y dado que sus codemandadas indicaron que participó en el negocio causal del título valor del cual se sirve la acción cambiaria, pidió ser excusado del pago hasta tanto se persigan los bienes de las deudoras principales, y, dentro de ellos, el vehículo identificado con placas WCW-170.

2.3. Ángela Consuelo Salazar, se notificó por medio de curador *ad litem* el 22 de septiembre de 2020 (fl. 58 y 62, cdno. 1) quien dentro de la etapa de postulación sólo indicó que los hechos no le constaban (fl. 60 y 61, ib).

3. Por auto del 24 de noviembre de 2020 se trasladó el escrito de escrito de excepciones al demandante por el plazo de 5 días, oportunidad que aprovechó para señalar los motivos por los cuales dichas excepciones no son prosperas.

4. A la postre, a través de auto adiado 15 de febrero de 2021, con apoyo en el numeral 2 del artículo 278 del CG del P, se ordenó fijar en lista el expediente (art. 120, ib), para ser decidida por sentencia anticipada, en medida que no debía practicarse pruebas.

CONSIDERACIONES

1. Los denominados presupuestos procesales que acuñó Von Bülow en 1.868 dentro de su *Teoría de la Relación Jurídica*, y refinó para Colombia la Corte Suprema de Justicia desde 1.936 a 1.968¹, se encuentran cabalmente reunidos. Asimismo, tras la revisión del discurrir procesal por ésta Judicatura, no se encuentra configurada causa de nulidad procedimental que obligue retrotraer lo actuado o, conforme al deber oficioso de legalidad, rehacer una actuación o acto procesal ya surtido, habilitándose la presente decisión.

2. A más de lo anterior, se anota, el estándar de prueba para ésta clase de procesos es alto, en lo que toca la carga *subjetiva* del demandado sin perjuicio del *principio de adquisición procesal*, pues, de entrada, el Despacho auscultó la concurrencia de los tres elementos necesarios para emitir una orden de apremio:

¹ CSJ, Sala de Casación Civil., sentencia del 15 de julio de 2.008, exp. 2002-00196-01.

(i) una manifestación del demandante tendiente a indicar que existe una obligación en cabeza del demandado; (ii) un título ejecutivo que permita evidenciar tal obligación; y, (iii) una negación indefinida dirigida a indicar que la obligación se encuentra insoluta.

De tal manera, se cumple la carga *subjetiva* de prueba en el demandante², tal y como lo pregonan los artículos 167 de la Ley 1564 de 2012 y 1757 del Código Civil; a consecuencia, y como lo dice un antiquísimo aforismo, *reus in excipiendo fit actor*, que traduce, en la excepción el demandado funge como el demandante, implicando que es su carga satisfacer, en la epistemología probatoria y jurídica, la extinción de la obligación o su inexigibilidad, entre otras causas.

3. Dicho lo anterior, cumple decir que las excepciones planteadas serán declaradas imprósperas, por razón de lo siguiente:

3.1. Se sabe que, a partir del artículo 626 del Código de Comercio, las obligaciones y derecho de las partes cambiarias quedan fijadas definitivamente por el tenor literal del título, no en vano "(...) *El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia*".

Aquí puede parodiarse cierta expresión³, para decir que "lo que no está en el título no está en el mundo", es decir, no existe, no obliga o no otorga derechos. De acuerdo con esta característica, entonces, en materia cambiaria la regla general es que nada puede ser tácito o implícito, todo debe ser expresado mediante palabras.

Con todo, podrían advertirse dos situaciones que en cierto modo serían excepciones a ese principio: i. que el aval no necesariamente tiene que expresar que ha constituido dicha garantía, pues si al firmar el título no se indica la razón de ello, la ley le da tal significación (inc. 2º, art. 634 CCo.); ii. que conforme al inc. 3º del art. 2º de la Ley 1231 de 2008, si el comprador o el beneficiario del servicio no firma la factura cambiaria, se considerará irrevocablemente aceptada si no reclama en contra de su contenido dentro de los 10 días siguientes a su recepción, de lo cual se dejará constancia en el evento de ser endosada. Es

² LESSONA, Carlo. *Teoría general de la prueba en Derecho Civil*, Parte General, Trad. de Enrique Aguilera de Paz, Madrid 1928, págs. 118 y sigs.

³ Quod non est in actis non est hoc mundis: lo que no consta en actas, o en el proceso, no está en este mundo.

decir, en el primer caso, hay una firma sin un directo "tenor literal", y en la segunda, hay una obligación sin firma.

Sobre tal particular, es necesario recordar que es principio del derecho civil que en las obligaciones constituidas por o a favor de un grupo de personas, respecto de una cosa divisible, cada una de ellas es obligada o puede reclamar únicamente la parte o cuota correspondiente. Empero, la convención, el testamento o la ley pueden consagrar la solidaridad, la que debe ser expresamente declarada si no la establece la ley. En tal virtud, puede exigirse a cada uno de los deudores solidarios o por cada uno de los acreedores, el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum (art. 1568 CC).

En el derecho mercantil, al contrario que en civil, la solidaridad se presume. Así lo estatuyen, el art. 825 Código de Comercio, y en cuanto a los títulos valores, los artículos 632 y 785 ibídem. Sin embargo, la respectiva codificación no desarrolla esa modalidad obligacional, debiendo irse al Código Civil al cual remite como regla general el art. 822 ídem.

En virtud del artículo 632 del estatuto mercantil, existe solidaridad entre los varios sujetos que suscribieron el título en un mismo grado cambiario, de tal modo que, si uno de ellos paga, sólo tiene contra los demás coobligados las acciones propias del derecho común, sin perjuicio de las acciones cambiarias que quepan contra las otras partes.

Y por el artículo 785 del Código de Comercio, en desarrollo del principio de autonomía de la prestación de cada suscriptor, el tenedor legítimo puede reclamar la obligación de todos o algunos de los deudores en un mismo grado, o incluso de varios obligados en distinto grado, quienes en caso de pago podrán ejercer las acciones cambiarias en contra de los signatarios anteriores.

3.2. En el actual caso, y respecto a las excepciones postuladas por Castro Romero, debe decirse que el pagaré N° 0696 del 11 de septiembre de 2013 se encuentra suscrito en el mismo grado por cada uno de los demandados, lo que significa, de un lado, que todo el componente obligacional que supone la incorporación de los derechos de crédito en disputa los alcanza, y, de otro lado, que no puede pretextarse la inoponibilidad de dichas obligaciones de crédito por quienes suscribieron el título.

A cual más, el contrato de *prenda sin tenencia* N° 5114 se realiza como accesorio⁴ que constituye un derecho real⁵ con sendas prerrogativas que garantizan el crédito. Sin embargo, dada precisamente su naturaleza, de éste provienen obligaciones independientes – relativas – para su constituyente (deudor), que no afectan la relación cartular – cambiaria –, y, de allí, que a pesar de no ser parte o suscriptor uno de los deudores cambiarios del contrato de *prenda*, pueda exonerarse de la obligación cambiaria.

Ahora bien, la presentación para el pago por excepción puede no ser obligatoria, y su no realización no presenta ninguna consecuencia en tanto el creador del título indique expresamente que dicha presentación no es obligatoria. Si el creador nada indica y en el título no se deja la constancia de presentación para el pago, la acción cambiaria podría caducar (artículos 680 y 681 del CCo). La presentación al pago dependerá del vencimiento del título. De suyo, el título debe ser presentado para el pago por el tenedor el día del vencimiento o dentro de los ocho días comunes siguientes, esto según el mandato del artículo 691 del Código de Comercio. La falta de presentación para el pago se sanciona especialmente por el numeral 1, artículo 787 *ibídem*, con la caducidad de las acciones de regreso, salvo el caso en el que el girador del título la hubiera excusado, consignándolo de manera expresa en el título, tal como lo consagran los artículos 680 y 681 del mismo cuerpo legal.

Significa lo anterior que la presentación para el pago, en éste caso, no resulta una condición de exigibilidad de la obligación por dos motivos: (i) en el título se consignó la forma de vencimiento como día cierto y sucesivo (art. 679, CCio), esto es, por instalamentos, con lo cual, la dinámica trazada por los creadores del mismo (demandados) mal puede implicar que con cada vencimiento se presente para el pago el pagaré; y, (ii) con el pago de una o varias cuotas sin la presentación para el pago, los deudores aceptan la forma de vencimiento y, por contera, renuncian a la presentación que ahora reclaman incumplida. Al efecto, el mismo demandado Castro Romero, arrimó con la contestación a la demanda sendos comprobantes de pago de las cuotas causadas entre febrero y noviembre de 2017, aclarándose por su propio acto, que la presentación para el pago se tornaba innecesaria. Una razón adicional para decirse excusada la presentación para el pago, es la autorización de aceleración del capital, contenida en la cláusula 5° del pagaré N° 0696, cuando pregona "(...) Desde

⁴ Código de Comercio, artículo 1208.

⁵ Superintendencia de Sociedades, concepto N° 220-18333 de 30 de mayo de 2001.

ahora aceptamos y autorizamos expresamente a EL ACREEDOR para declarar extinguido o insubsistente el plazo, que falte para el pago total de la deuda y exigir el pago inmediato con todos sus accesorios (...); ello, sólo puede significar que se facultó al acreedor para exigir el pago de la obligación sin condicionamiento alguno, tal y como lo advirtió la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ, SC del 8 de junio de 2013, de la siguiente manera:

"(...) Por otro lado, en los negocios en que el pago de la prestación dineraria se ha pactado por instalamentos o cuotas periódicas, la cláusula aceleratoria es la estipulación en virtud de la cual el obligado faculta al acreedor para que, frente al incumplimiento del primero u otras situaciones allí previstas, declare extinguido el plazo y exija el importe total del crédito; verbi gratia, ante la deshonra en la temporalidad o cuantía de los abonos u otro compromiso contractual, cuando así se ha acordado, surge la potestad exclusiva del acreedor para, en ejercicio de dicho convenio, invocar la exigibilidad inmediata y anticipada de las obligaciones no vencidas "con todas las consecuencias jurídicas que ello apareja, entre ellas, la de que a partir de ese momento es posible su recaudo forzoso (art. 488 del C. de P. C.) y además, que allí [cuando el acreedor la hace efectiva] comienza a contarse el término de prescripción, conforme consagra el artículo 2535 del Código Civil" (Sent. T. de 14 de marzo de 2006, exp. 00342).

Sobre el particular, el artículo 69 de la Ley 45 de 1990 preceptúa que "[c]uando en las obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto en contrario (...)", lo que convierte al precitado acuerdo en una clara expresión de la libertad contractual, de las facultades, los poderes y derechos que confiere el ordenamiento jurídico a los sujetos para regular de manera específica los actos de disposición de sus intereses; en un elemento accidental del negocio jurídico, plenamente válido en la medida en que no resulte contra legem, es decir, siempre y cuando se ajuste a los imperativos legales, caso en el cual, la ley reconoce y convalida su contenido, en idéntico sentido al que las partes hayan querido otorgarle (...)"

En línea con lo anterior, resulta totalmente desacertado indicarse que, quien contestó la demanda y propuso excepciones, predique una vulneración al debido proceso por indebida notificación. Ello, contraria la esencia protectora del artículo 133 del CG del P (num. 8), y, pasa por alto el carácter *trascendente* de la causal de nulidad, que, además, no sólo puede sanearse (art. 135, ib) sino que, en éste caso, nunca se configuró.

A su turno, resulta categórico que el pago parcial alegado carece de toda posibilidad de acogimiento, en medida que, no se pone en duda el pago de algunos instalamentos, como efectivamente lo comprobó el demandado (fls. 37 a 40, cdno. 1), pero definitivamente quedó demostrado que dichos pagos fueron

tenidos en cuenta al tiempo de formularse la demanda, como que, el título expresa una obligación total de \$96.600.000, más la ejecución por el saldo insoluto se sigue por la suma de 43.051.749, dejando al descubierto la aplicación de los pagos que efectuó el extremo demandado.

3.3. Siguiendo el respectivo estudio, y especialmente respecto a las excepciones postuladas por la demandada Salazar Rivera, relacionadas con la adquisición de un vehículo de transporte colectivo de pasajeros en favor de Mauricio Sarmiento Calvo, con quien sostuvo una relación sentimental que culminó con el abandono del hogar; y, a la postre, al enterarse de la mora en el pago de las cuotas del crédito, el inicio de la negociación para llevar a cabo la dación en pago del rodante identificado con placas WCW170, debe indicarse que (i) el contrato privado de sociedad celebrado entre Salazar Rivera y Sarmiento Calvo, sólo está suscrito por la primera, lo que resulta en su mera afirmación; y, (ii) que la propuesta de dación en pago, se elevó por la demandada ante la demandante, sin que ello implique su perfeccionamiento o aceptación de ésta última.

En todo lo demás, las consideraciones precedentes y relacionadas con la obligación cambiaria a partir de los suscriptores del pagaré N° 0696, la presentación para el pago y los pagos parciales, le resultan plenamente aplicables, tornándolas imprósperas.

4. Así entonces, y como corolario, la excepciones propuestas serán desestimadas, por lo cual, y de contera, es menester condenarse en costas del proceso a los demandados, atendiendo la previsión del artículo 361 y el numeral 1° del artículo 365, ambos, del C.G del P, en consonancia con el párrafo primero del literal B, numeral 4° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con un siete (7%) del valor de la suma determinada como debida.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Cincuenta y Uno (51) Civil Municipal de Bogotá D. C.**, en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR imprósperas las excepciones propuestas por el extremo pasivo.

SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución en los términos señalados en el mandamiento ejecutivo.

TERCERO: ORDENAR a las partes, por conducto de sus apoderados o curadores *ad litem*, presentar la liquidación del crédito, atendiendo las previsiones del artículo 446 del CG del P.

CUARTO: ORDENAR el avalúo de los bienes cautelados a los demandados, en la forma establecida por el artículo 444 del CG del P, y rematarlos, para con su producto saldar el crédito y las costas liquidadas.

QUINTO: De existir dineros cautelados a los demandados, entréguese al demandante, hasta la concurrencia del crédito y las costas liquidadas y aprobadas, siempre que no existan cautelas concurrentes por créditos con prelación o privilegio.

SEXTO: CONDENAR en costas a los demandados. Al efecto, téngase como agencias en derecho la suma de \$ 3.000.000. **Líquidense** por Secretaria.

SÉPTIMO: Cumplida la liquidación de costas, **remítase** el expediente ante los Jueces Civiles Municipales para la Ejecución de Sentencias de Bogotá – Reparto. **Ofíciense**.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,


HERNANDO GONZÁLEZ RUEDA
Juez

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Judicial
Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal Bogotá, D.C.

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICO POR ESTADO
No. 003 DE HOY 19 ENE. 2022
DE 20 22
El Secretario. _____